UNA INEVITABLE (Y EXITOSA) CONVIVENCIA POLÍTICA: EMPRESARIOS Y GOBIERNOS SOCIALISTAS DE CHILE Y ESPAÑA

ANSELMO FLORES ANDRADE¹

INTRODUCCIÓN

ACTUALMENTE EXISTEN VARIOS GOBIERNOS en América Latina que pueden, en términos generales, denominarse de izquierda: Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay y recientemente Bolivia. Evidentemente, cada uno tiene en la práctica características político-ideológicas muy diferentes debido a la presencia en ellos de una combinación de populismo, caudillismo e incluso asambleísmo que impide hablar de una misma situación política y discursiva en esas naciones. En los próximos meses alrededor de 11 países tendrán elecciones federales para renovar a sus presidentes; y debido a las altas probabilidades de que ganen candidatos considerados de izquierda la convivencia política entre esos gobiernos y los empresarios se torna inevitable. En este contexto, la cooperación entre ambos actores será fundamental no sólo para conseguir que las estrategias económicas que se implanten sean efectivas sino también para crear el ambiente político y social indispensable si se quiere enfrentar con éxito los problemas que tendrán por delante esos gobiernos. En ese sentido, se hace imperante un repaso histórico *grosso modo* de lo que ha sido la relación de los empresarios con los gobiernos socialistas más exitosos de las últimas décadas: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos que conforman la coalición denominada la Concertación en Chile. Con ello pretendemos aportar algunos elementos que muestran que los peligros y amenazas que comúnmente se le endosan a la izquierda en el poder son más mitos que realidades contemporáneas. En efecto, los gobiernos socialistas de Chile y España, independientemente de los déficit sociales que aún presentan sus sistemas

¹ Agradezco a Fabiola Rodríguez Barba la lectura crítica del texto. No obstante, las limitaciones y deficiencias contenidas en él son mías.

políticos, pueden considerarse exitosos debido a la relativa bonanza experimentada por sus sistemas económicos y sobre todo a la estabilidad y gobernabilidad de que han gozado hasta ahora. En comparación con sus pasados inmediatos, Chile y España son un buen ejemplo de las consecuencias de la reconversión ideológica, moderación y pragmatismo tanto de los actores empresariales como de los grupos políticos de la izquierda en el poder.

Este artículo expone en trazos generales la relación de los empresarios con los gobiernos socialistas de Chile y España, bajo la hipótesis de que, con motivo de la reconfiguración del sistema económico mundial, la hegemonía ideológica del neoliberalismo y la generalización de la democracia política, las transformaciones observadas en los empresarios y la izquierda han sido fundamentales para atenuar la *fobia* tradicional del empresariado hacia los gobiernos de izquierda, así como para ensanchar el horizonte de convivencia de ambos actores en sus respectivos sistemas políticos.

LAS TRANSFORMACIONES DEL EMPRESARIADO

El papel de los empresarios y sus organizaciones en los sistemas políticos de la región se ha modificado en las últimas décadas. La reconfiguración del sistema económico mundial, los procesos de transición política hacia la democracia y la implantación de la economía de mercado han modificado las pautas tradicionales mantenidas por el empresariado frente al Estado y el gobierno. Esta relación, en términos generales, se caracterizaba por la subordinación política e ideológica del conjunto del empresariado al Estado, amparada por un fuerte proteccionismo gubernamental para con la producción nacional. El modelo de sustitución de importaciones que imperó en esa época no sólo protegió a los empresarios de la competencia externa (y solapó ineptitudes y vicios en la actividad productiva) sino que también moldeó su "bajo perfil" político y los privó de un discurso, ya no digamos alterno respecto del modelo de desarrollo nacional, sino distintivo de ese actor económico. No obstante, esta situación se revirtió a partir de las décadas de los setenta y ochenta, cuando en ese periodo se inició una paulatina e irreversible politización del empresariado como producto de cambios políticos, sociales, culturales y económicos que experimentaron, con diversos matices, modalidades y grados, una diversidad de países.² En naciones tan disímiles como México, Brasil, Perú,

² En este proceso existieron confrontaciones entre los grandes y pequeños empresarios,

Argentina, Chile y España, el empresariado comenzó a presentar cambios en su estructura organizativa, en su mentalidad e ideología, así como en sus relaciones con el Estado, los partidos políticos y la sociedad. Los procesos de transición a la democracia y fundamentalmente la *ola neoliberal* que se inició por esos años no sólo consistieron en sustituir a los militares por civiles en los gobiernos ni en una serie de medidas técnicas para sacar de la crisis económica a los países de la región, sino que incluyó todo un movimiento económico, político e ideológico de envergadura llevado a cabo para enterrar el modelo de crecimiento y el perfil en que se sustentaba el Estado proteccionista. De tal suerte que la *ola neoliberal* iniciada en la década de los ochenta no encontró obstáculo alguno a la cohesión y consenso generado por todas las clases políticas y económicas de la región respecto del devenir económico de sus sistemas políticos. Así, bajo la bandera de menos Estado y más mercado, las economías latinoamericanas abrieron sus fronteras al comercio internacional teniendo como objetivo su inserción en el mercado mundial. El fenómeno de la globalización se imponía más que como una ideología como una realidad que no podía dejarse de tomar en cuenta.³ De ese modo, la mayor interdependencia de las economías y la reconfiguración del sistema internacional trajeron una nueva redefinición de la actividad estatal, la existencia de políticas económicas de corte neoliberal, nuevas reglas externas e internas del juego económico y un proceso de ajuste estructural de las economías de la región.

lo que tuvo repercusiones tanto en su representación institucional como en su capacidad organizativa. No obstante, ante situaciones que pusieron en peligro el *statu quo*, mantuvieron la unidad sobre la fragmentación. Véase Aníbal Viguera, "Los empresarios, la política y las políticas en América Latina. Una propuesta de análisis comparado", en Ricardo Tirado (comp.), *Los empresarios ante la globalización*, México, UNAM-Cámara de Diputados, LV Legislatura, 1994; Jorge Schvarzer y Ricardo Sidicaro, "Empresarios y Estado en la reconstrucción de la democracia en Argentina", en Celso Garrido (coord.), *Empresarios y Estado en América Latina*, México, UAM-CIDE-CLACSO-Fundación Friedrich Ebert, 1988; Carlos H. Acuña, "La relación de las organizaciones empresarias con regímenes políticos en América Latina: los casos argentino y brasileño", *Boletín Informativo Techint*, núm. 255, 1988; Francisco Durand, "The Transformation of Business-Government Relations under Fujimori", *Canadian Journal of Latin America and Caribbean Studies*, vol. 24, núm. 47, 1999; Felipe Mancilla, "La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Estado boliviano", *Revista de Ciencia Política*, vol. XVII, núms. 1-2, Santiago de Chile, 1995; y Eli Diniz, "Reformas económicas y democracia en el Brasil de los años noventa: las cámaras sectoriales como foro de negociación", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, octubre-diciembre de 1995.

³ Zaki Laidi, *Un mundo sin sentido*, México, Fondo de Cultura Económica, 1997; Ulrich Beck, *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*, Barcelona, Paidós, 1998; Zygmunt Barman, *La globalización. Consecuencias humanas*, México, Fondo de Cultura Económica, 2001.

En estos procesos de reforma, los empresarios desempeñaron un papel fundamental; no sólo los promovieron e impulsaron sino que se constituyeron en el actor privilegiado del modelo económico surgido de esas iniciativas.⁴ De forma individual o colectiva apoyaron las estrategias de política económica llevadas a cabo por los gobiernos en turno y, en algunos casos, cumplieron funciones de asesoría institucional en dicha materia, como en la negociación de acuerdos comerciales.⁵ En ese sentido, la relación de empresarios (en especial los económicamente más fuertes) y gobiernos tendió más a la colaboración que al conflicto; por ejemplo, una de las principales reformas económicas la constituyeron las privatizaciones de las empresas públicas en casi todas las naciones latinoamericanas. La mayoría de ellas se hizo con escasa transparencia, lo que propició la concentración de la propiedad por grandes empresarios y, por otro lado, casos de corrupción. Esta situación, además, provocó vínculos más estrechos entre las élites económicas y el gobierno.⁶

En un periodo en que la economía era la que marcaba el rumbo de las cosas, los empresarios adquirieron mayor importancia política debido a dos situaciones. Por un lado, al debilitamiento estatal y las políticas económicas instrumentadas por los gobiernos locales, y por el otro, a la difusión de una ideología (neoliberal, mercantilista e individualista) que les proporcionaba un papel destacado en el nuevo orden económico mundial. En efecto, la reconfiguración del escenario internacional desde la década de los ochenta incidió no sólo en la reorientación ideológica sino también en la participación del empresariado de la región en el proceso de políticas públicas, ya que sugerían y aun, en ocasiones, eran los encargados de diseñarlas y de coordinar su puesta en marcha (situación totalmente diferente de las décadas precedentes). En consecuencia, los empresarios y sus estructuras de representación adquirieron gran influencia en el proceso

⁴ Francisco Durand, "Nuevos empresarios (y algunos viejos problemas)", *Nueva Sociedad*, núm. 151, septiembre-octubre de 1997; Peter S. Cleaves, "Empresarios y política empresarial en América Latina", en Manuel Alcántara e Ismael Crespo (comps.), *Los límites de la consolidación democrática en América Latina*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996; y Aníbal Viaguera, "Los empresarios, la política y las políticas en América Latina...", *op. cit.*

⁵ Véase, por ejemplo, Cristina Puga, *Los empresarios organizados y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, México, UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 2004; y Cecilia Montero, "Relaciones Estado-empresarios en una economía global: el caso de Chile", *Nueva Sociedad*, núm. 151, septiembre-octubre de 1997.

⁶ Ivés Meny, "Política, corrupción y democracia", *Política y Gobierno*, vol. III, núm. 1, primer semestre de 1996; Francisco Durand, "Cleptocracia y empresariado en el Perú", *Nueva Sociedad*, núm. 194, noviembre-diciembre de 2004; Claudio Weber Abramo y Eduardo Ribeiro Copobianco, "Licitaciones y contratos públicos. El caso de Brasil", *Nueva Sociedad*, núm. 194, *ibidem*.

político de la región; su lugar estratégico en el nuevo modelo económico les proporcionó un amplio poder de negociación frente al Estado, en detrimento de otros grupos sociales (por ejemplo, los obreros y campesinos).

La ideología empresarial que los distinguió de las décadas precedentes consistió en una serie de ideas sobre sí mismos, sus actividades y la importancia de éstas en la creación de la riqueza. Las características del discurso que adoptaron los empresarios contribuyeron a desarrollar una valoración positiva de sus actividades, distinta de la tradicional. Por ejemplo, en poco tiempo, los empresarios españoles y chilenos lograron revertir la imagen negativa que grupos sociales de consideración se habían formado de ellos. Como es sabido, esa imagen tradicional del empresariado chileno y español hacía referencia a sus visiones cortoplacistas y se les señalaba como especuladores y aventureros.⁷ De tal suerte que en el imaginario social de ambos países al empresariado se le endosó como rasgo característico una mentalidad especuladora más que productiva.

En Chile, la característica esencial del empresariado a partir de la década de los ochenta fue su actitud firme y decidida para consolidar su presencia en la sociedad, a través de una ideología renovada y propia, con el propósito de ubicarse como un actor político-social de relevancia para el sistema político. En esa tarea incidió de manera fundamental la puesta en marcha, a partir de la mitad de los setenta, de un modelo de economía de mercado (que trajo consigo la apertura de la economía hacia el exterior, la modificación de la política arancelaria, la formación de un mercado de capitales, la disminución del rol del Estado, la política de privatizaciones de empresas y servicios sociales como la salud y la vivienda), así como una diferente relación entre Estado y sociedad.⁸ El gobierno de Pinochet legitimó el papel de los empresarios al asignarles el rol de motor de la economía chilena y de pilares del crecimiento y desarrollo económico del país. Es con esas coordenadas y contenidos⁹ como el empresariado chileno logró articular un discurso coherente y unitario que lo hizo aparecer ante la

⁷ Óscar Muñoz Goma, *Los empresarios y la industrialización en Chile: una visión de largo plazo*, Santiago de Chile, CIEPLAN, Nota Técnica núm. 122, 1988; y del mismo autor, *Los inesperados caminos de la modernización*, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 1995. Para el caso español, véase Joaquín P. López Novo, "Empresarios y relaciones laborales: una perspectiva histórica", en Faustino Miguélez y Carlos Prieto (coords.), *Las relaciones laborales en España*, Madrid, Siglo XXI Editores, 1996, especialmente las páginas 134 a 137.

⁸ Cecilia Montero, *La revolución empresarial chilena*, Santiago de Chile, Ediciones Dolmen-CIEPLAN, 1997; y Guillermo Campero, "Empresarios: entre la modernidad y la legitimidad", en *Organizaciones empresariales y políticas públicas*, Montevideo, Ediciones Trille, 1992.

⁹ José Joaquín Brunner, "La concepción autoritaria del mundo", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. XLII, núm. 3, 1980; y Pilar Vergara, *Las transformaciones del Estado bajo el régimen militar chileno*, Santiago de Chile, CIEPLAN, Documento de Trabajo, 1980.

sociedad como portador de valores y símbolos propios. Aunque sus conceptos no fueron en sí novedosos, lo inédito lo constituyó esa decisión de revertir la imagen tradicional que de ellos tenía la sociedad y, en consecuencia, presentarse como el motor del desarrollo y la modernización del país. Así, bajo el lema de la “batalla de las ideas” los empresarios se abocaron a ganar un espacio en la sociedad y a ocupar un lugar destacado en el modelo de desarrollo del país.¹⁰

En España, la forma particular de integración (corporatismo estatal) del empresario en el desarrollo económico y sus relaciones con los distintos aparatos del Estado, así como un papel subordinado a los lineamientos gubernamentales que le asignó el franquismo, provocaron que careciera de la autonomía y la libertad necesarias para desarrollarse como actor económico-social de características similares a las de los empresarios chilenos. De ese modo, hasta en tanto no se creó la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en 1977, los empresarios no contaron con un discurso coherente, ni con una estrategia de acción que les permitiera fortalecerse como actor y, en consecuencia, tener un papel político y económico de mayor trascendencia. Si bien es cierto que desde hacia décadas existía un entramado de organizaciones encuadradas en la Organización Sindical (OS), éstas actuaban sin coordinación efectiva entre ellas. Además, gran parte de las actividades se dejaban en manos de la burocracia del llamado sindicalismo vertical.¹¹ De este modo, no será sino hasta varios meses después de la muerte de Franco, y no sin grandes esfuerzos, cuando el empresariado español contará con un discurso unitario; por lo pronto, durante los meses siguientes al fallecimiento del dictador se observará una clara división del mundo empresarial, así como un reacomodo en su interior.¹²

En ambos países, y particularmente en Chile, los empresarios difundieron la tesis de que la empresa privada y la actividad empresarial constituían el fundamento del crecimiento económico. Asimismo, se divulgó una nueva imagen del empresariado que subrayaba el carácter social de éste, y, en ese sentido, se hizo una defensa a ultranza de la legitimidad moral, política y económica de su presencia y su actividad en los respectivos sistemas políticos. De ese modo, se definió la empresa privada como creadora de riqueza

¹⁰ Anselmo Flores Andrade, “El contexto socioeconómico e institucional y el comportamiento de los empresarios durante la transición a la democracia en Chile y España”, *Foro Internacional*, núm. 59, El Colegio de México, 2000.

¹¹ Glicerio Sánchez Recio y Julio Tascón Fernández (eds.), *Los empresarios de Franco. Política y economía en España, 1936-1957*, Barcelona, Editorial Crítica-Universidad de Alicante, 2003.

¹² Anselmo Flores Andrade, “Los empresarios y la transición a la democracia en España”, *Estudios Sociológicos*, núm. 54, El Colegio de México, 2000.

za y bienestar social y se destacó su papel en el proceso productivo nacional, calificándola como insustituible. En ese sentido, se difundió la idea de que la economía de mercado constituía el fundamento tanto del crecimiento económico como de la libertad (general e individual). Esto es, se ubicó la libertad económica como la base de las distintas libertades individuales; de tal suerte que para los empresarios chilenos la existencia y pervivencia de las libertades individuales sólo serían posibles con la economía de mercado. Es decir, sólo habría desarrollo político si existía una economía "privada" y dinámica, y esta última sólo podía darse con la libertad económica. En el caso español, se afirmó que los cambios políticos, es decir la democracia, no podían por sí mismos alcanzar los objetivos gubernamentales de crecimiento y desarrollo; para ello, era preciso también otros objetivos, la modernización de las relaciones industriales. En esta tesitura, la reforma política y la reforma económica iban unidas y, en consecuencia, si esa unidad no se daba, la economía padecería sus efectos. En suma, los empresarios vincularon la democracia con el desarrollo económico, y por ello los conceptos de eficiencia, competitividad, racionalidad y eficacia fueron vinculados con los principios de libertad, seguridad y representatividad. En ese contexto, se afirmó que la empresa privada tenía como finalidad la promoción social, la dotación de bienes y servicios a la comunidad, y que en ella se producía la realización personal de los hombres.

En cuestiones más específicas, en ambos países se subrayó el nuevo rol que debía representar (caso español) y consolidar (caso chileno) el Estado. En especial, se le confinó al papel de vigilante del Estado de derecho y a crear un entorno propicio para el fomento y crecimiento de las actividades "particulares"; más enfáticamente, se demandó el carácter subsidiario del Estado. Es decir, un Estado abocado a aquellas tareas que la actividad empresarial por distintas razones no pudiese atender. Dichas demandas contrastaban sustancialmente con las de las décadas precedentes, en donde se solicitaba apoyo constante al Estado y la intervención gubernamental en la economía; pero ahora la situación era distinta, y esos conceptos fueron recogidos en una variedad de textos publicados a lo largo de la década de los ochenta. En el caso chileno, encuentran su forma más acabada en el documento denominado "Acta de la Libertad"; en el caso español, en los textos difundidos a propósito de los actos de "afirmación empresarial". En ellos se hacía una apología de la empresa privada y de los empresarios, y de esa forma estos últimos universalizaron sus intereses particulares.

El manejo de ese discurso fue posible por la aparición de un empresario más moderno, educado y cosmopolita; más propenso a participar en política y a incursionar en los mercados y la competencia internacional que a mantener las pautas tradicionales de acción empresarial. En ambos

países el universo empresarial contó con voceros reconocidos social y políticamente por parte de los hombres de la iniciativa privada, del gobierno y de los trabajadores. En efecto, personas como Manuel Feliú y Fernando Agüero, en Chile, y Carlos Ferrer Salat, Agustín Rodríguez Sahagún y Max Mazín, en España –todos ellos importantes empresarios, cabezas de las ramas más dinámicas de la economía, con una preparación técnica y profesional que distaba mucho de la de sus antecesores, con una visión más moderna de las relaciones laborales y de la actividad de la empresa privada–, impulsaron una nueva forma de acción y presencia empresarial dentro del sistema político.¹³ Ello contribuyó, por ejemplo en el caso de España, a la formación de una estructura organizativa moderna, profesional y compleja (la CEOE) y a una nueva dinámica de asociacionismo empresarial desconocida hasta entonces. En Chile, por otra parte, la presencia de estos líderes corrió paralela a la aparición de un discurso moderno, atractivo y coherente que contribuyó a consolidar la presencia del empresariado y sus organizaciones (principalmente, la CPC) en el sistema político. Pero lo más importante es que esos líderes empresariales hicieron sintonía con el carácter y los propósitos de los políticos de las nuevas democracias, situación que posibilitó, no sin algunas desavenencias y desconfianza iniciales, acercamientos mutuos con respecto a las características y objetivos de la política económica que instrumentaron los gobiernos socialistas de Chile y España.

LA RENOVACIÓN DE LA IZQUIERDA

La izquierda posee matices que abarcan una diversidad de partidos, grupos y posiciones, ya no digamos de un país a otro, sino en una misma nación. Todos ellos expresan situaciones distintas. No obstante, para efectos de este ensayo hablaremos de manera general de la izquierda para referirnos a las posiciones político-ideológicas contrarias a los principios y valores del neoliberalismo. De ahí que, a pesar de que tradicionalmente existe un bagaje político-ideológico básico entre los grupos y partidos políticos de izquierda (por ejemplo su identificación con los intereses de la clase obrera, su demanda de ampliar la participación de los trabajadores en los ámbitos

¹³ Cecilia Montero, "La evolución del empresariado chileno: ¿surge un nuevo actor?", *Colección Estudios CIEPLAN*, núm. 30, Santiago de Chile, 1990; Víctor Pérez Díaz, "Los empresarios y la clase política", *Papeles de Economía*, núm. 20, Madrid, 1985; Genaro Arriagada, *Los empresarios y la política*, Santiago de Chile, Ediciones LOM, 2004; y Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, *El poder de los empresarios. Política e intereses económicos en la España contemporánea (1875-2000)*, Madrid, Taurus, 2002, en especial las páginas 339 a 411.

de la empresa, su rechazo a la democracia burguesa, sus ataques beligerantes a la propiedad privada, el capital y en general al modo de producción capitalista), la forma más común en la actualidad es considerar de izquierda toda aquella opinión o posición que vaya en sentido contrario a la agenda del Consenso Washington.¹⁴

Al igual que los empresarios, la izquierda chilena y la española no fueron inmunes a las modificaciones de su entorno. La reconfiguración del escenario internacional, desde la década de los ochenta, incidió en su discurso y estrategias políticas. En ese sentido, dos sucesos de envergadura han actuado sobre la reorientación de la izquierda latinoamericana; por un lado, el colapso del socialismo real en Europa, que le restó cohesión y viabilidad al pensamiento tradicional de izquierda; por el otro, la reconfiguración del sistema económico mundial (y los procesos de innovación tecnológica, flexibilidad laboral, primacía del mercado como regulador de la vida social, competitividad, apertura comercial y eficiencia de los aparatos productivos que esto conlleva) como expresión del fenómeno de la globalización. Tales hechos han contribuido a la hegemonía de la democracia liberal y de la economía de mercado, por lo que su convergencia actualmente marca los límites y posibilidades de acción política a las alternativas contestatarias o reaccionarias respecto del modo de producción capitalista.

Dentro de este proceso de cambios, el más sintomático lo constituye la moderación del contenido del discurso de la izquierda en Chile y en España, ya que, a diferencia del pasado inmediato en que expresaba la necesidad de cambios revolucionarios o sistémicos del modo de producción capitalista y de su forma de gobierno: “la democracia burguesa”, en la actualidad sustituye dichas expresiones por las de reforma, cambio gradual o reorientación de las políticas económicas, pero dentro del modelo de economía de mercado. Además, ya no se pide derrocar y cambiar la forma de gobierno burguesa sino que se demanda eficacia al gobierno y, en su caso, cambiar a malos gobernantes pero a través de los mecanismos de la democracia liberal. Igualmente, las categorías de clases sociales, pueblo y lucha de clases han sido desplazadas por las de sociedad, ciudadanos y sectores sociales.

Importancia sustancial reviste la sustitución del vínculo Estado y revolución por el de mercado y democracia, así como el reconocimiento de la importancia de los empresarios en el desarrollo de las economías de los países, además de considerarlos cruciales para el mantenimiento de la go-

¹⁴ Carlos M. Vilas, “La izquierda latinoamericana y el surgimiento de regímenes nacional-populares”, *Nueva Sociedad*, núm. 197, mayo-junio de 2005, y del mismo autor, “La izquierda latinoamericana”, *Nueva Sociedad*, núm. 157, septiembre-octubre de 1998.

bernabilidad de los sistemas políticos de la región. De tal suerte que no es exagerado afirmar que los marcos conceptuales, y prácticos, de la izquierda en Chile y en España se han modificado considerablemente.¹⁵ Así, en los últimos años hemos observado a una izquierda más pragmática y gradualista, sin las posiciones ideológicas tradicionales que la confrontaban con los gobiernos en turno; por el contrario, en la actualidad postula un capitalismo más humano y abandera un socialismo democrático y responsable.¹⁶ La globalización, y los procesos que conlleva, ha establecido nuevas coordenadas ideológicas, políticas y económicas que a los actores políticos les resulta difícil ignorar. No existe lugar en el discurso de la izquierda (si quiere tener posibilidades de acceder al poder y gobernar) para los viejos conceptos y las añejas utopías. La nueva lógica de la economía mundial, y la proliferación de sus acuerdos bilaterales y multilaterales, implica una serie de obligaciones políticas y económicas que no pueden evadirse si se quiere tener acceso a los mercados, la tecnología y el flujo de capitales que resultan indispensables para el desarrollo de las sociedades y para la estabilidad de los sistemas políticos.

En ese sentido, la actual estrategia de crecimiento y desarrollo económico impone serias restricciones a los virajes económico-políticos radicales, por lo que este contexto ha acentuado un mayor pragmatismo en las acciones y discursos de la izquierda y del empresariado. El pragmatismo es común en los empresarios para proteger sus intereses (individuales y colectivos), así como en la izquierda (para acrecentar sus posibilidades de gobernar).¹⁷ Pero este pragmatismo tiene un sentido positivo pues ha resultado fundamental en la gobernanza de los sistemas políticos de la región, ya que ha flexibilizado y ensanchado el horizonte de convivencia entre ambos actores. De tal modo que el espacio público y político nacio-

¹⁵ Carlos Cousiño Yañez, "Populismo y radicalismo político durante el gobierno de la Unidad Popular", *Estudios Públicos*, núm. 82, 2001; Abdón Mateos, "Una transición dentro de la transición. Auge, unidad y conversión de los socialistas", en Javier Tusell y Álvaro Soto (eds.), *Historia de la transición, 1975-1986*, Madrid, Alianza Editorial, 1996; y Javier Santiso, "¿Del buen revolucionario al buen liberal? A propósito de un extraño camaleón latinoamericano", en Guy Hermet, Soledad Loaeza y Jean-Francois Prud'homme (comps.), *Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos*, México, El Colegio de México, 2001.

¹⁶ Ignacio Walker, *Socialismo y democracia. Chile y Europa en perspectiva comparada*, Santiago de Chile, CIEPLAN-Hachette, 1990.

¹⁷ Aquí conviene recordar la experiencia del Partido Socialista francés a finales de la década de los setenta, que, luego de un gobierno de corte tradicional bajo Mauroy -quien llevó a cabo políticas de nacionalizaciones y monetaristas redistributivas-, tuvo que virar (en los gobiernos de Fabius y Rocard durante la primera mitad de los ochenta) hacia posturas más pragmáticas acordes con "el espíritu de la época" para mantenerse en el poder. Al respecto, véase José María Maravall, *Los resultados de la democracia*, Madrid, Alianza editorial, 1995.

nal es menos rígido y compartimentalizado que en épocas pretéritas, donde la ideología y las posiciones extremas establecían un juego de suma cero entre la izquierda y los empresarios.

Por otra parte, cabe subrayar que en este nuevo perfil que presenta la izquierda han incidido las experiencias autoritarias y dictatoriales recientes del continente. La salvaje embestida represiva sufrida por los líderes y grupos sociales adherentes de la izquierda por parte de los gobiernos no democráticos ha dejado una profunda huella.¹⁸ Por ello, en el caso de Chile y de España, la posibilidad de que se repitiera el entorno socioeconómico del pasado influyó en las estrategias políticas de los gobiernos socialistas. Ante esa *memoria histórica* se ha reevaluado la democracia y lo que ella implica (valores, principios y discurso); de ahí que, si bien es cierto que el panorama social y económico de la región demanda soluciones urgentes, éstas ya no son enarboladas al estilo del Chile de los años sesenta y setenta, sino a través de categorías como eficiencia y eficacia. Es decir, reformas dentro de los modelos de economía de mercado y democracia pluralista.

LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS DE CHILE Y ESPAÑA¹⁹

Junto a esta renovación ideológica de la izquierda y las transformaciones experimentadas por el empresariado, tres situaciones incidieron en el comportamiento y en la relación de los gobiernos socialistas con el empresariado chileno y español: el legado de la estructura político-institucional, el contexto económico en que se desarrolló la relación entre ambos actores y el grado de vinculación del empresariado con las dictaduras de Francisco Franco y Augusto Pinochet. Con respecto al primero, cabe subrayar que los socialistas de España y la coalición de centro-izquierda de Chile, comúnmente denominada como la Concertación, inician sus experiencias de gobierno en contextos político-institucionales sumamente distintos. La estructura político-institucional de la *democracia tutelada* chilena le restó margen de maniobra política a los gobiernos encabezados por la Concertación, en particular a los de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, lo que no suce-

¹⁸ *Ibidem.*

¹⁹ El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) estuvo en el gobierno (bajo la presidencia de Felipe González) durante los periodos 1982-1986, 1986-1989, 1989-1993 y 1993-1997 (cuatro continuos) y actualmente lo hace bajo la conducción de José Luis Rodríguez Zapatero, a partir de 2004. Mientras que la Concertación de Partidos por la Democracia lo ha hecho en tres periodos de gobierno bajo las figuras de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), y actualmente, de Ricardo Lagos (2000-2006). Los dos primeros, miembros del Partido Democracia Cristiana, mientras que Lagos pertenece al Partido Socialista.

dió en el caso de España, en donde Felipe González lideró una democracia avalada por casi todos los actores políticos y económicos fundamentales del Estado español. Los fuertes enclaves autoritarios heredados de la dictadura militar chilena (por ejemplo, la permanencia de Pinochet como comandante en jefe del ejército y posteriormente en su calidad de senador vitalicio ejerció una gran influencia en la vida política debido al prestigio que tenía tanto en las fuerzas armadas chilenas como en la derecha y amplios sectores sociales; igualmente, la presencia de un Consejo de Seguridad Nacional con facultades sobre el proceso político chileno, la existencia de senadores no electos así como de un sistema electoral que premiaba a la primera minoría y castigaba a la mayoría, entre otros factores) funcionaron como camisa de fuerza para los proyectos políticos y económicos de la Concertación;²⁰ a pesar de ello, y no sin grandes esfuerzos colectivos, se pudo construir importantes consensos que permitieron crear un ambiente de estabilidad y paz social.²¹ En este panorama, la tutela del ejército sobre el desempeño del gobierno socialdemócrata impidió cualquier vuelco a la “obra económica y política” del régimen autoritario.

En el caso español, al arribar Felipe González al gobierno las reformas políticas más importantes ya se habían llevado a cabo durante el periodo 1977-1980; por ejemplo, la ley para la reforma política que posibilitó la sustitución de las cortes franquistas por un congreso electo por el voto popular, la promulgación de una nueva Constitución del Estado español y la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña.²² Esta profunda transformación política española dejó pendiente la reforma del sistema económico, pues con el objeto de llevar a cabo una exitosa transición se postergaron los cambios necesarios en la estructura económica del país.²³

²⁰ Carlos Huneeus, *El régimen de Pinochet*, Santiago de Chile, Editorial Sudamericana, 2000; Andrés Allamand, “Chile: la transición empantanada”, en Carlos Elizondo y Luis Maira (eds.), *Chile-México. Dos transiciones frente a frente*, México, CIDE-Grijalbo-Prochile, 2000; Manuel Antonio Carretón, “La transición incompleta y el régimen consolidado. Las paradojas de la democratización chilena”, *Revista de Ciencia Política*, vol. XVI, núms. 1-2, 1994; y Luis Maira, *Chile, la transición interminable*, México, Grijalbo, 1999.

²¹ Alejandro Foxley, “Los objetivos económicos y sociales en la transición a la democracia”, en *Políticas económicas y sociales en el Chile democrático*, Santiago de Chile, CIEPLAN-UNICEF, 1995.

²² Al respecto, véanse los artículos temáticos en Ramón Cotarelo (comp.), *Transición política y consolidación democrática en España (1975-1986)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1992; y José Félix Tezanos, Ramón Cotarelo y Andrés de Blas (eds.), *La transición democrática española*, Madrid, Sistema, 1989.

²³ José Luis García Delgado, *Economía española de la transición y la democracia*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1990; y Ernest Lluch, “Transición económica y transición política: la anomalía 1978-1980”, en Javier Tusell y Álvaro Soto (eds.), *op. cit.*

No obstante, en una perspectiva más amplia, dicha postergación resultó beneficiosa para llevar a buen puerto, durante la década de los ochenta, las reformas a dicha estructura.

Por otro lado, los contextos económicos a los que arribaron los gobiernos socialistas también distaban de ser idénticos. En el caso chileno, en términos generales, la economía gozaba de buena salud (en 1989 el crecimiento del PIB fue de 9.9; la inflación ascendía a 21%, aunque alta, era de las más bajas de la región; y la tasa de desempleo rondaba el 6.3%), y su perfil se encontraba fuertemente asentado debido a que ya se había pasado el trago amargo de la fase de ajuste estructural y de reconversión de la planta productiva.²⁴ No sucedió lo mismo en la España de Felipe González, quien inició su gobierno en medio de una fuerte crisis económica (con un paro de la población económicamente activa de 16%, seis puntos por encima de la media de la OCDE de esa época; una inflación de 19%, y un fuerte déficit de la balanza comercial) y con la tarea de realizar cambios económicos y reformas estructurales de la planta productiva que reactivaran el crecimiento del país.²⁵ Así, la herencia económica que recibió el PSOE en 1982 fue negativa debido a que existía una profunda crisis que se expresaba en un obsoleto aparato productivo y un desbordante desempleo. De hecho, ése fue un periodo de políticas de ajuste y reformas estructurales, caracterizado por devaluación de la moneda, política monetaria restrictiva, reducción de la rigidez del mercado de trabajo, reconversión industrial, moderación salarial y malas condiciones económicas por el pago puntual y oneroso de la deuda pública.²⁶ No obstante, el recuerdo del fallido golpe de Estado de febrero de 1981 y la buena experiencia concertacionista (Pactos de la Moncloa) resultaron fundamentales para el acercamiento y trabajo conjunto entre empresarios, sindicatos y gobierno socialista; de ahí que no hubo problemas importantes para inaugurar una serie de acuerdos tripartitas (por ejemplo, el Acuerdo Interconfederal de 1983 o el Acuerdo Económico y Social de 1984)²⁷ para superar el difícil entorno

²⁴ Hernán Buchi, *La transformación económica de Chile: del estatismo a la libertad económica*, Santiago de Chile, Editorial Norma, 1993; Eduardo Silva, "La política económica del régimen chileno durante la transición: del neoliberalismo radical al neoliberalismo pragmático", en Paul Drake e Iván Jaksic (eds.), *El difícil camino hacia la democracia en Chile, 1982-1990*, Santiago de Chile, FLACSO, 1993; y Patricio Silva, "Empresarios, neoliberalismo y transición democrática en Chile", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, octubre-diciembre de 1995.

²⁵ José Luis García Delgado, "Economía e incorporación a la Comunidad Europea", en Javier Tusell y Álvaro Soto (eds.), *op. cit.*

²⁶ José María Maravall, *El control de los políticos*, Madrid, Taurus, 2004, especialmente el capítulo II.

²⁷ Esos acuerdos tenían sus antecedentes inmediatos en el Acuerdo Básico Interconfederal de 1979, el Acuerdo Marco Interconfederal de 1980 y el Acuerdo Nacional de Empleo

económico que se le presentó al gobierno de Felipe González. En efecto, esos acuerdos contribuyeron a acercar las diferentes posiciones mantenidas por los actores políticos y sociales en torno de la política económica del gobierno; sobre todo, las medidas acordadas tuvieron éxito al ser consideradas como elemento de la estrategia gubernamental para modernizar la estructura productiva del país (enfocadas en elevar la competitividad de las empresas españolas, generar empleo y ayudar a sanear las variables macroeconómicas).²⁸ Lo anterior, a pesar de la fuerte movilización social y obrera que convergieron en una serie de huelgas generales (durante 1985, 1988 y 1992) y de momentos de fuerte cuestionamiento, por parte de diversos actores políticos y económicos, sobre la viabilidad de las estrategias instrumentadas;²⁹ en su conjunto, los 16 años de gobierno socialista fueron de luces y sombras; esto es, periodos de crisis económica con efervescencia social seguidos de periodos de bonanza y bienestar social, y viceversa.³⁰

La “buena salud” de la economía chilena, el compromiso de los dirigentes políticos de que no habría una vuela al pasado, de que se respetaría la propiedad privada y de que se continuaría el esquema económico prevaleciente, junto con un programa de gobierno moderado con énfasis en lo social, contribuyeron a desterrar el miedo expresado por la derecha y los empresarios al caos durante el gobierno de los socialistas. En efecto, la Concertación ejerció un gobierno prudente y responsable, no sólo para preservar y mejorar las variables macroeconómicas heredadas sino sobre todo para evitar cualquier pretexto de insurrección militar o de bloqueo económico por parte del empresariado chileno. En ese sentido, evitó cualquier viraje político “espectacular” admitiendo la gradualidad de una futura reforma política, y sobre todo gobernó con una perspectiva de largo plazo. Dichas situaciones permitieron a los distintos gobiernos de la Concertación presentar buenos resultados en materia de combate a la pobreza, salud social, comercio exterior, balanza de pagos, inflación y PIB; por

de 1981. Véase Sergio Gálvez Biesca, “La primera etapa de la política laboral del gobierno socialista (1982-1992). La reforma del estatuto de los trabajadores de 1984”, *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, núm. 3, 2003.

²⁸ Rafael Pardo Avellaneda, “Organizaciones empresariales, sindicatos y relaciones industriales en el cambio de siglo”, en Javier Tusell *et al.* (eds.), *Entre dos siglos. Reflexiones sobre la democracia en España*, Madrid, Alianza editorial, 1996; y Alfonso Guerra y José Félix Tezanos (eds.), *La década del cambio. Diez años de gobierno socialista, 1982-1992*, Madrid, Sistema, 1992.

²⁹ Manuel Tuñón Lara, “El movimiento obrero de 1981 a 1991”; y Ludolfo Paramio, “Los sindicatos y la política en España (1982-1992)”, ambos en Alfonso Guerra y José Félix Tezanos (eds.), *op. cit.*

³⁰ José María Maravall, *El control de los políticos*, *op. cit.*

ejemplo, la inflación pasó de 27.3% en 1990 a 4.7% en 1998 y a 2% en 2003; el desempleo disminuyó de 15% a 7% y luego a 9% para los mismos años; por otra parte, el crecimiento económico se incrementó de 6.4% en el periodo 1984-1989 a 7.8% durante el periodo 1990-1998, aunque cayó bruscamente, a 2.3%, en los años 1999-2003, y al año siguiente se recuperó: 5.5 por ciento.³¹

En este contexto, el rol político de los empresarios ha sido ligeramente distinto en los gobiernos democráticos de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006). Durante el primer gobierno de la Concertación, existió un periodo de desconfianza y cautela por parte de los empresarios, acentuado por la difícil coyuntura económica de 1991-1992 que motivó al gobierno de Aylwin a instrumentar una reforma tributaria y laboral para enfrentar el desequilibrio fiscal y financiar el gasto social, así como para readecuar el esquema laboral a las exigencias del mercado laboral. No obstante, pasada la difícil coyuntura de esos dos primeros años de gobierno, se entró en una fase de acercamiento y confianza empresarial en el gobierno de la Concertación.³² En los gobiernos socialdemócratas siguientes, el modelo se consolidó, se mantuvieron positivas las variables macroeconómicas, se fomentó una política de inserción de Chile en el sistema económico y político internacional y se crearon mejores condiciones sociales y económicas para el florecimiento de la empresa privada, de tal manera que a partir de la década de los noventa los empresarios, en coordinación con el gobierno, han participado como nunca antes en el proceso de desarrollo del país. Esto no excluye que en determinados momentos del proceso político hayan tenido confrontaciones, pero éstas han sido excepcionales y ninguna ha adquirido tal carácter que ponga en riesgo la estabilidad. Más bien se han circunscrito a una serie de críticas sobre lo que los empresarios consideran pérdida de competitividad y dinamismo de la economía chilena.

A diferencia de los empresarios españoles, los chilenos eran más homogéneos ideológicamente, es decir se consideraban fervientes partidarios de la derecha y abiertamente “pinochetistas”, y han desempeñado un papel más político, en el sentido de que la adhesión que brindaron al gobierno militar rebasó los límites de la defensa de sus intereses estrictamen-

³¹ Manuel Castells, *Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 60-62.

³² Óscar Muñoz Goma y Carmen Zeledón, “Chile en transición: estrategia económica y política”, *Revista de Ciencia Política*, núms. 1-2, 1993; Alejandro Foxley, “La transición económica en Chile: el gobierno de Aylwin”, en Carlos Elizondo y Luis Maira (eds.), *op. cit.*; y René Cortazar, “El proceso de cambios y la concertación social”, en Óscar Muñoz (comp.), *Transición a la democracia. Marco político y económico, op. cit.*

te corporativos económicos.³³ Los empresarios chilenos en todo momento han defendido lo que consideran los pilares del sistema económico. La ideología empresarial difundida y arraigada entre sus miembros, durante el gobierno militar, ha sido una verdadera fuerza impulsora de acciones defensivas contra lo que consideran ataques al *statu quo*.³⁴ Los ha dotado de argumentos y de una visión compartida no sólo de sí mismos sino también de la economía y la política. En este sentido, a diferencia de sus contrapartes españoles, quienes muestran un perfil político más diverso, los empresarios chilenos tienen un mayor talante ideológico como consecuencia de su adhesión explícita al régimen de Pinochet y de la experiencia traumática del gobierno de la Unidad Popular.³⁵ Por ello, ayudaron no sólo a implantar el modelo económico sino también a consolidar un tipo de orden político autoritario, lo que no sucedió en España, en donde las políticas económicas intentaron acoplarse al modelo de democracia pluralista de la Comunidad Europea.³⁶

A pesar de las importantes diferencias que separan a Chile y España, los gobiernos socialistas se caracterizaron por ser políticamente moderados y por poner en marcha mecanismos necesarios para resolver la crisis económica (en el caso de España) y consolidar el modelo de economía de mercado (en el caso de Chile). En otras palabras, instrumentaron políticas económicas rigurosas compatibles con políticas sociales orientadas a suavizar los efectos de aquéllas. En España, Felipe González lo dejó muy en claro en su discurso de investidura, en noviembre de 1982, al reconocer que en la realización de su programa de gobierno (lucha contra la crisis económica, avance hacia una sociedad justa e igualitaria y reforma de la administración del Estado, entre otros puntos) se imponía una realidad: “la de que el margen de maniobra para la política económica era reducido”,³⁷

³³ Carlos Huneeus, “El comportamiento político de los empresarios en Chile”, *Perspectivas*, vol. 14, núm. 2, 2001.

³⁴ Cecilia Montero, *La revolución empresarial chilena...*, *op. cit.*; y Carlos Huneeus, *El régimen de Pinochet*, *op. cit.*

³⁵ Aquí conviene señalar que en Chile, cuando los empresarios abordaron el tema de la democracia, lo hicieron desde dos perspectivas: la Constitución chilena de 1980 y el sistema democrático anterior a la Unidad Popular (UP). Respecto de la primera, defendieron el modelo económico previsto en la Constitución, el cual les garantizaba un régimen político de “democracia tutelada” por los militares; garante de la iniciativa privada y mantenedor del rol subsidiario del Estado, así como protector del modelo económico del gobierno militar. En cuanto a la segunda, atacaban el modelo político anterior al golpe militar debido a que, de acuerdo con su percepción, bajo ese régimen se sintieron intervenidos negativamente por la política, además de que el sistema fue incapaz de evitar la experiencia socialista.

³⁶ Anselmo Flores Andrade, “Los empresarios y la transición a la democracia en España”, *op. cit.*

³⁷ Véase el discurso de investidura de Felipe González Márquez, Congreso de los Dipu-

por lo que llevaría a cabo medidas duras pero necesarias para reactivar la productividad de la planta del país; ello no sólo con la mayoría absoluta parlamentaria con que contaba, sino también con el consenso de los factores de la producción (empresarios y obreros). En ese sentido, los pactos tripartitas resultaron fundamentales en la estrategia del gobierno socialista de Felipe González, ya que moderaron las protestas sociales y dotaron de legitimidad y apoyo a sus políticas económicas (paradójicamente, las protestas sociales estallaron más en periodos de bonanza que en fases de recesión y crisis).³⁸ De tal modo que, para su segundo periodo, el jefe de gobierno español comentara que la prioridad gubernamental no sería ya el combate a la crisis sino el mantenimiento de las positivas variables macroeconómicas y la integración de España en la Comunidad Europea, y, una vez logrado lo anterior, se atacarían las desigualdades de la sociedad española.³⁹ En Chile también se inauguró una política de acuerdos tripartitas con los empresarios y los sindicatos, y con ese espíritu concertacionista se realizaron reformas a la ley laboral y tributaria, a pesar de las reticencias iniciales de los empresarios.⁴⁰ El gobierno de Patricio Aylwin, y posteriormente los de Frei y Lagos, realizaron una cuidadosa gestión macroeconómica, no obstante las presiones para ir en sentido contrario. En ambos países, los socialistas comprendieron que en el contexto de la interdependencia económica el éxito de sus gobiernos y economías pasaba necesariamente por los ámbitos de la competitividad, inversión, costos de producción, racionalidad y la responsabilidad, por lo que evitaron cualquier intento de aplicar fórmulas heterodoxas contrarias al modelo neoliberal en boga.

Un dato que conviene subrayar es que en los dos países (sobre todo en Chile) existió consenso entre gobierno y empresarios sobre el modelo económico. La Concertación, como ya mencionamos, en ningún momento se

tados, 30 de noviembre de 1982, www.la-moncloa.es. Ya desde los inicios de los ochenta existían señales de esta tendencia a la moderación; por ejemplo, el lema de su Congreso Extraordinario de 1979, donde aún mantenía su fuerte ideología programática, fue el de "Forjando el Socialismo", mientras que el XXIX Congreso, realizado dos años más tarde, en 1981, se llamó "Raíces para la Democracia". Incluso en este último se desterró el talante marxista mantenido hasta entonces. Véase Victoria Prego, *Así se hizo la transición*, Barcelona, Plaza y Janés, 1995.

³⁸ José María Maravall, *Los resultados de la democracia*, *op. cit.*, especialmente el capítulo 4.

³⁹ Véase el discurso de investidura de Felipe González Márquez, Congreso de los Diputados, 22 de julio de 1986, www.la-moncloa.es.

⁴⁰ Alejandro Foxley, *Economía política de la transición: el camino del dialogo*, Santiago de Chile, Ediciones Dolmen, 1993; Edgardo Boeninger, "Transición chilena: articulación y límites", en Carlos Elizondo y Luis Maira (eds.), *op. cit.*; Luis Maira, *Chile, la transición interminable*, México, Grijalbo, 1999; Crisóstomo Pizarro, Dagmar Raczynski y Joaquín Vial (eds.), *Reformas económicas y sociales en el Chile democrático*, Santiago de Chile, CIEPLAN-UNICEF, 1995.

propuso cambiar dicho modelo, aplicado por el régimen de Pinochet; en todo caso buscó modificar algunos instrumentos de política económica con el propósito de reorientar los costos y beneficios de la economía neoliberal seguida hasta ese momento. De tal modo que, más que el ámbito económico, fueron los problemas de subordinación de los militares al poder civil y la cuestión de los derechos humanos los más conflictivos durante los gobiernos socialdemócratas; como lo ejemplifican los sucesos denominados ejercicios de coordinación y enlace (de noviembre de 1990), con motivo del conocimiento del dictamen de una comisión investigadora del Congreso chileno que fincaba responsabilidades al hijo de Pinochet debido a su participación en una operación de venta de empresas que fabricaban armamentos y que eran propiedad del ejército; la reunión del cuerpo de generales (en mayo de 1993), a propósito de una citación judicial de oficiales por una investigación sobre presos políticos desaparecidos durante la dictadura de Pinochet; y más recientemente el *affair* Pinochet.⁴¹ De tal suerte que en Chile las asignaturas pendientes de la democratización han incidido en las relaciones entre empresarios y los gobiernos de la Concertación. No obstante, el prudente manejo de las variables económicas ha producido confianza y una buena relación, en términos generales, con los empresarios. En España el aspecto político no ha sido fundamental en la relación de los empresarios con el gobierno del PSOE (ya superadas las desavenencias sobre las transformaciones políticas importantes y ante la crisis económica en que estaban inmersos); las líneas económicas del gobierno socialista han sido los temas de debates y diálogos de ambos actores en las últimas décadas. En este contexto, la entrada y pertenencia de España a la Comunidad Económica Europea, actualmente Unión Europea, constituyó un poderoso incentivo para el acercamiento entre las directrices económicas del gobierno socialista de Felipe González y la postura de los empresarios españoles. En ese sentido, podemos afirmar que en ambos casos las condiciones de estabilidad institucional, junto con un manejo prudente y responsable de la política económica, han permitido no sólo mantener y elevar los índices de crecimiento, sino enfrentar con mayor posibilidad de éxito los retos que impone el sistema económico internacional al mercado interno. Pero también la gobernabilidad y la estabilidad social que han mantenido ambos países ha sido un factor importante en la eficacia de las políticas económicas instrumentadas y que se han reflejado en los niveles de crecimiento y desarrollo económico. Ello, no obstante las carencias y los déficit que muestran aún en torno al combate a la pobreza, educación, salud y el bienestar social.⁴²

⁴¹ Luis Maira, *Chile, la transición interminable*, op. cit.

⁴² Manuel Castells, *Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial*, op. cit., y José María Maravall, *Los resultados de la democracia*, op. cit.

En este contexto, conviene subrayar que la inserción de las dos naciones en el sistema político y económico internacional ha sido importante para la tranquilidad empresarial, ya que la estructura jurídico-política internacional reduce el margen de maniobra de los gobiernos nacionales, en especial en cuanto a los aspectos económicos. En ese sentido, la pertenencia de España a la Unión Europea y los distintos acuerdos de libre comercio signados por el gobierno chileno (con Estados Unidos, México, la Unión Europea, Canadá, el Mercosur, Corea y China, entre otros) han sido fundamentales para reafirmar la situación objetiva contemporánea: el estrecho margen para un viraje económico radical de las naciones. Por ello, los gobiernos socialistas y los empresarios de Chile y España coinciden en que, en las condiciones económicas y políticas actuales, el papel de estos últimos en el crecimiento y desarrollo de las sociedades implica una relación de trabajo constante.⁴³ Así lo han expresado en comunicados institucionales y en los foros más importantes del sector privado. En ese sentido, una característica de esta situación ha sido la inclusión de los más importantes empresarios en las delegaciones oficiales de las misiones comerciales organizadas por los gobiernos en sus respectivos programas de trabajo en el exterior.

Por lo anterior, nadie cuestiona que, en el contexto actual de integración económica regional y mundial, la cooperación entre empresarios y gobiernos, así sean estos últimos de izquierda, es necesaria para hacer frente con eficacia a los problemas y retos que imponen los acuerdos comerciales, la competitividad de los mercados internacionales y el fortalecimiento de la cadena productiva nacional. Ante este saber, los empresarios iberoamericanos en su conjunto, con mayor o menor énfasis, demandan de sus gobiernos el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y el principio de subsidiariedad del Estado, todo ello en un marco de eficiencia; y consideran sumamente importante impedir que desde el gobierno se caiga en la tentación de atender lo coyuntural y de hacer ofrecimientos demagógicos debido a que, a su juicio, no sólo se crean falsas expectativas sino que, de querer satisfacerlas, se generarían graves perjuicios a la economía nacional.

⁴³ Osvaldo Rosales, "La inserción internacional de Chile en la década de los 90", en Carlos Elizondo y Luis Maira (eds.), *op. cit.*; Sebastián Sáez, Juan Salazar y Ricardo Vicuña, "Antecedentes y resultados de la estrategia comercial del gobierno de Aylwin", *Estudios CIEPLAN*, núm. 41, diciembre de 1995; Juan Antonio Yáñez-Barnuevo y Ángel Viñas, "Diez años de política exterior del gobierno socialista (1982-1992)", en Alfonso Guerra y José Félix Tezanos (eds.), *op. cit.*; y Raúl E. Sáez, "Chile y América Latina: apertura comercial y acuerdos bilaterales", en Andrea Butelmann y Patricio Meller (eds.), *Estrategia comercial chilena para la década de los 90: elementos para el debate*, Santiago de Chile, CIEPLAN, 1992.

La inserción de las economías chilena y española en el sistema mundial ha posibilitado la colaboración de sus gobiernos y actores empresariales para trabajar en el crecimiento y desarrollo económico de sus países, pues a pesar de la buena marcha de las variables macroeconómicas existen importantes déficit sociales cuyo abatimiento no es posibles postergar. No obstante lo anterior, y en caso de que los gobiernos en turno deseen modificar el *statu quo*, siempre está latente la amenaza de que un viraje económico radical tendría consecuencias en la inversión, el crecimiento y el empleo. Esto es, en los ámbitos de dominio actual de los empresarios.

CONCLUSIONES

La experiencia de la relación de los empresarios con gobiernos de izquierda en Chile y España nos ofrece varias enseñanzas. Una de ellas, como lo muestran los gobiernos del PSOE y la Concertación de España y Chile, respectivamente, es que es posible hacer coincidir la estabilidad democrática con el crecimiento económico; es decir, que a pesar de las fuertes presiones para atender lo coyuntural, los gobiernos socialistas fueron moderados y prudentes para no provocar situaciones que reprodujeran el pasado inmediato de inestabilidad social y crisis política. Al mismo tiempo, la inestabilidad no convenía a los empresarios; ante este reconocimiento se pudieron encontrar caminos para disentir pero sobre todo para cooperar en cuanto a los objetivos políticos y económicos de ambos actores.

Una segunda lección es que la moderación política e ideológica de la izquierda y el pragmatismo de los dos actores han permitido flexibilizar el horizonte de convivencia política y social. Los actores ya no se sitúan en los extremos de la línea ideológica sino que se acercan al centro y se oponen en cuestiones de diseño técnico de las políticas económicas. Es decir, se reconoce implícitamente que la gobernabilidad de los sistemas políticos actuales pasa por el centro político-ideológico.

Un dilema importante que deberán enfrentar los partidos de izquierda que consigan constituirse en gobierno es cómo compatibilizar el empleo, bienestar, rentabilidad, eficiencia y la competitividad internacional con las demandas sociales de sus simpatizantes en un entorno exterior restrictivo; pero sobre todo cómo van a resolver la confrontación de las necesidades técnicas y pragmáticas del arte del gobierno con las ofertas discursivas que ofrecieron para ganar las elecciones. Las reglas del juego democrático implican compromisos con sus procedimientos y principios, por lo que no le resultará fácil —ni estará exenta del pago de costos— a la izquierda que quiera pasar por alto dichos mecanismos para realizar sus

programas ideológicos. Además, la posibilidad de que se continúe con gobiernos sin mayoría en casi todos los países latinoamericanos impide que puedan implantarse políticas de corte extremadamente izquierdista sin la colaboración de otras formaciones políticas, por lo que, ante tal ausencia de mayorías legislativas, se impone la negociación y la ponderación de las demandas. En ese sentido, una lección de las transiciones a la democracia ha sido el carácter gradual de los cambios y las costosas consecuencias sociales y políticas de un "giro de campana". Por ello, lo que se avecina en el panorama latinoamericano, salvo contadas excepciones, es que, más que una tendencia al viraje radical del modelo económico y político de la región, lo que podríamos atestiguar es la consolidación del acercamiento de la izquierda a las prácticas y políticas que han permitido la vigencia de la economía de mercado y la democracia.